

La concertación. El último intento de legitimación de la dictadura argentina (1982)

The “concertación”. The last attempt of legitimization by the Argentinean dictatorship (1982)

Joaquín Baeza Belda*
baeza@usal.es

Resumen: Tras la guerra de Malvinas, el presidente militar Reynaldo Bignone trató de pactar con los partidos políticos el final de la dictadura argentina iniciada en 1976. La propuesta tendría el nombre de concertación y fue el último intento de salvar la legitimidad perdida por las Fuerzas Armadas. En este artículo trazaremos un recorrido por los distintos discursos de legitimidad que ensayaron los militares desde 1976, subrayando las divisiones que existían al interior de las Fuerzas Armadas, para entender la originalidad de la concertación. Estudiaremos también las causas del fracaso de ésta, analizando cómo llegaban los partidos políticos a la coyuntura de fines de 1982.

Palabras clave: Argentina, dictadura, transición a la democracia

Abstract: *After the Falklands War, military president Reynaldo Bignone tried to reach an agreement with political parties at the end of the dictatorship that started in 1976. This proposal was known as “concertación” and was the last attempt to save the lost legitimacy of the Armed Forces. This article examines the different legitimacy discourses that the military used from 1976 in order to understand the originality of the “concertación”. It also analyzes the reasons for its failure by studying how political parties arrived to the 1982 situation.*

Keywords: *Argentina, dictatorship, transition to democracy*

*Doctor en Historia. Universidad de Salamanca.

Introducción¹

El 24 de marzo de 1976 se inicia en Argentina el periodo dictatorial más duro que conoció el país. El autodenominado *Proceso de Reorganización Nacional*² desplegó un nivel de violencia represiva y alcanzó una cuota de poder totalmente inéditos incluso para una sociedad que en las últimas décadas había experimentado una larga lista de golpes de Estado y gobiernos autoritarios³. En un salto cualitativo respecto a otras intervenciones militares anteriores, los líderes del golpe de 1976 pretendieron crear un nuevo orden cuyos cambios afectarían a todas las esferas de la sociedad, apoyados sobre un sistema represivo simbolizado en la figura del desaparecido.⁴

Sin embargo, incluso una dictadura que anunciaba el fin de unos partidos políticos que asimilaba con el populismo y se presumía tan firme y autosuficiente necesitaba para permanecer en el tiempo algún tipo de legitimación que fuera convalidado por la sociedad⁵. La tarea, no obstante, resultó sumamente compleja para unos militares que, tras su fachada monolítica, atravesaban numerosos conflictos y disputas. Cuando el relato de la lucha contra la llamada subversión empezó a agotarse (y lo hizo pocos años después del golpe, hacia 1979, precisamente, por el propio éxito represivo), las Fuerzas Armadas tuvieron enormes dificultades para

encontrar una justificación alternativa que explicara su permanencia en el poder. A la larga, esta situación casi irresoluble los empujó a tratar de encontrar un atajo en la ocupación de las islas Malvinas en abril de 1982.

La derrota ante los británicos en esa aventura bélica casi predestinada al fracaso supondría el definitivo principio del fin del *Proceso* y la búsqueda de un nuevo tipo de legitimación para preparar la salida del poder de la manera menos traumática posible. El encargado de la misión sería el nuevo presidente *de facto*, el general Reynaldo Bignone⁶, que poco después de llegar al mando, lanzaría a los distintos partidos la propuesta que se conocería como concertación, una suerte de oferta de diálogo y pacto. La concertación, sin embargo, fracasó casi inmediatamente en su intento por incorporar a unos partidos poco preocupados por la suerte final del régimen.

Si bien analizar esa propuesta de pacto ya constituye uno de los objetivos de esta investigación, el momento de la concertación también aporta elementos para comprender la compleja relación que se estableció entre las Fuerzas Armadas y los diversos partidos políticos. De manera general, pese a la frustración de esta salida pactada de la dictadura a fines de 1982, el breve episodio de la concertación ofrece una puerta de entrada para un caso de transición a la democracia con aris-

¹Agradezco a Analía Goldentul y a María Gajate Bajo la revisión de este trabajo y los interesantes comentarios y sugerencias que han aportado al mismo.

²Si bien el término *Proceso de Reorganización Nacional* puede interpretarse como un eufemismo para nombrar a la dictadura iniciada en 1976, ya que era la denominación que utilizaban los militares para referirse a la misma, lo usaremos, sin ninguna carga positiva, como un sinónimo para hablar de este periodo, dado su amplio uso en el mundo académico y como forma de diferenciarlo de otras experiencias dictatoriales.

³Desde 1930, Argentina sufrió hasta seis golpes de Estado: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Por supuesto, aunque fueron protagonizados por las Fuerzas Armadas, no todos tuvieron la misma naturaleza y alcance. Mientras que, por ejemplo, los golpes de 1955 y 1962 tuvieron un objetivo más limitado y generaron periodos autoritarios provisionales, los dos últimos tenían una vocación mucho más profunda. Además de estos golpes exitosos, se sucedieron en esos años varios intentos infructuosos, así como otras formas de presión de los militares sobre el poder civil.

⁴Para un conocimiento general sobre la dictadura iniciada en 1976 se pueden consultar los trabajos de (NOVARO; PALERMO, 2003), (QUIROGA, 2004), (LIDA *et al.*, 2008) y (CANELO, 2008). Sobre la represión militar y la figura del desaparecido es recomendable la lectura de (CALVEIRO, 2004).

⁵En este trabajo entenderemos el concepto de legitimidad desde una perspectiva de inspiración weberiana, como un mecanismo de aceptación del poder por parte de la sociedad de acuerdo a unos requisitos.

⁶Reynaldo Bignone, que había iniciado su carrera militar en 1947, era un hombre de fuertes convicciones católicas. Desde 1980 se desempeñaba como comandante de los Institutos Militares, hasta que en diciembre de 1981 fue pasado a retiro en el contexto del golpe palaciego que apartó al presidente Roberto Viola. No extraña por tanto su fría relación con el siguiente presidente, Leopoldo Galtieri.

tas difíciles de subsumir en los modelos que han ofrecido hasta ahora las ciencias sociales⁷. Al mismo tiempo, aporta claves explicativas sobre dos aspectos del régimen militar iniciado en 1976: en primer lugar, sobre la forma en que los militares trataron de justificar su permanencia en el poder durante más de un año, desde el final de la guerra de Malvinas, en junio de 1982, hasta la celebración de las elecciones, en octubre de 1983. En segundo lugar, sobre el modo en que los uniformados encararon la transición hacia la democracia, poniendo el foco en la compleja relación que se estableció entre las Fuerzas Armadas y los principales partidos políticos⁸. Al respecto, si en este trabajo prestaremos una mayor atención sobre el peronismo por encima de otras formaciones se debe tanto a la importancia de este partido como a las ambigüedades y contradicciones que éste desarrolló a lo largo de estos años, que simbolizan perfectamente el carácter no lineal de todo este proceso.

Para desarrollar estos objetivos, el trabajo se estructura en tres partes. Primero, se realiza un recorrido sobre los distintos, y en ocasiones contradictorios, modelos de legitimación que ensayaron los militares desde 1976 a 1982. Nuestra intención aquí será insertar el episodio de la concertación como el capítulo final de una serie de proyectos legitimadores por parte de los uni-

formados y examinar qué papel se les reservaba a los partidos y qué respuesta ofrecieron en cada coyuntura. A continuación, examinaremos el estado en que llegaron los diversos partidos a los últimos momentos del *Proceso* para comprender mejor su rol en el contexto posmalvinense. Finalmente, en el tercer aparato, se analizan los discursos desplegados por el presidente Bignone en su estrategia de concertación y las respuestas que éste obtuvo por parte de los principales partidos del ecosistema político argentino.⁹

Los distintos intentos de legitimación de la dictadura argentina

El llamado *Proceso de Reorganización Nacional* nació con una paradoja. Si, por una parte, las Fuerzas Armadas desplazaron violentamente al legítimo gobierno presidido por María Estela Martínez de Perón¹⁰, en el *Acta* que emitió el mismo día del golpe, la Junta Militar¹¹ anunció que los objetivos últimos de su acción eran los de “asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino” (ANSALDI, 2006, p. 103-104). Tras esta contradicción de derribar un gobierno surgido del voto para llegar a continuación a la democracia se

⁷Como resulta natural, ha sido la ciencia política la disciplina que más aportes ha realizado al estudio de las transiciones a la democracia. Un buen resumen de los distintos enfoques que se han utilizado para analizar estos procesos se puede encontrar en (MARTÍ, 2001). Básicamente, éstos se pueden dividir en enfoques de tipo estructural, que suelen encontrar la respuesta a los cambios de régimen en ciertos requisitos previos (económicos, culturales, ...), y los de tipo estratégico, que se centran en la interacción de diversos actores. En este trabajo, aplicaremos un planteamiento de ese segundo tipo, siempre siendo conscientes de sus limitaciones y siempre dando atención al contexto histórico en el que se sitúan esos actores. Por otra parte, una de las tipologías más famosas de las transiciones es la que divide a estos procesos en transición por pacto o por colapso. El caso argentino, pese a ser clasificado habitualmente como transición por colapso tras la derrota de Malvinas, ofrece muchos matices que dificultan su inclusión en esta tipología, como demuestra el episodio de la concertación.

⁸Las relaciones cívico-militares no se agotaban en este momento con las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Al contrario, uno de los protagonistas claves dentro de la esfera civil serían las llamadas organizaciones de derechos humanos, que contribuyeron enormemente al desgaste de los uniformados. Pese a su importancia, no hemos incluido estas organizaciones en nuestro análisis ya que la concertación abre un momento eminentemente político e institucionalizado, en el que los militares apelan directamente a los partidos.

⁹En cuanto a las fuentes, además de las obras citadas en la bibliografía, hemos utilizado principalmente fuentes hemerográficas del periodo como los diarios *Clarín*, *El País* (España) o *La Voz del Interior* y publicaciones como *El Bimestre* y *Somos*.

¹⁰María Estela Martínez de Perón fue la esposa del líder justicialista Juan Domingo Perón. Cuando éste murió, en julio de 1974, María Estela heredó la presidencia, al haber sido elegida vicepresidenta. Si bien María Estela era su nombre oficial, en adelante nos referiremos a ella como Isabel Perón, al ser este nombre en clave (originado durante la etapa de la proscripción peronista) mucho más extendido.

¹¹Como manera de conjurar los excesos de personalismo en los que habían caído los regímenes militares anteriores, las Fuerzas Armadas trataron de implementar un esquema de poder lo más institucional y equitativo posible. La Junta Militar estaba, por ejemplo, conformada por el comandante de cada una de las Armas. Ese carácter tripartito trató de aplicarse asimismo a los ministerios y, en menor medida, también a las gobernaciones provinciales. La excesiva rigidez de un esquema que sólo podía avanzar a partir de un consenso absoluto y la preponderancia natural del Ejército respecto al resto de armas sería también una de las causas del desgaste del *Proceso*.

encerraban, por supuesto, varios condicionamientos que suavizaban ese contraste. Los militares, por ejemplo, hablaban de instaurar y no restaurar la vieja democracia, pretendiendo crear un nuevo sistema institucional en el que se arrogaban el papel de garantes de su continuidad y en el que los viejos partidos no tendrían cabida. Pero incluso así, la pretensión de ajustarse al derecho y, al mismo tiempo, situarse por encima de él llevaría a los militares a paradojas irresolubles que no sólo desgastarían el proyecto del *Proceso*, sino que acrecentarían las tensiones al interior de las Fuerzas Armadas.¹²

Durante sus primeros años, la dictadura ofrecerá una imagen sólida en la que era muy difícil de detectar, tras la represión, la censura y el apoyo tácito de buena parte de la sociedad, esas fisuras que en ocasiones podían alcanzar gran virulencia. De hecho, a la altura de 1978, la Junta Militar disfrutaba de un amplio consenso entre la sociedad, tanto en lo que se refería a su lucha contra las organizaciones guerrilleras como a su política económica. Sin embargo, a dos años del golpe, cuando parecía obvio que la guerrilla había sido completamente derrotada, se hacía cada vez más arduo de justificar un aparato represivo tan severo y amplio. Peor aún, la supuesta legitimidad de destino del *Proceso*, una teórica democracia que no contuviera los excesos del populismo, no iba más allá de unas vagas definiciones sin una hoja de ruta explícita, sin concreción en plazos y objetivos.

Dejando a un lado la política económica, que sería otro de los más importantes focos de conflicto, la

modalidad de la salida del régimen se convertiría en el principal clivaje intramilitar. Básicamente, existían tres grandes posiciones al respecto, como resumió César Tcach: en primer lugar, la del llamado continuismo antipartidario, que defendía la continuidad de la veda política por tiempo indefinido. Un segundo grupo, etiquetado como continuismo contra los partidos tradicionales, sostenía que la clave de la salida del régimen se encontraba en la creación y fortalecimiento de una derecha promilitar que recogiera la esencia del *Proceso*. En esa línea habría que ubicar el proyecto, patrocinado especialmente por el general Albano Harguindeguy, del Movimiento de Opinión Nacional. Por último, se encontraban los militares que apostaban por una democracia tutelada, en la que tendrían cabida los partidos tradicionales, pero siempre vigilados por unas Fuerzas Armadas que tendrían aseguradas un lugar en el entramado institucional (TCACH, 1996, p. 51-53).

Fruto de esas dudas y ambigüedades, no sería hasta una fecha tan avanzada como diciembre de 1979 cuando los militares lanzaron un documento conjunto en el que plasmaron su visión sobre el futuro político, las llamadas *Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional*¹³. Esas *Bases* tenían como objetivo la institucionalización del papel de las Fuerzas Armadas como árbitro del sistema político. Contraintuitivamente, a pesar de todas esas exigencias, lo que se insinuaba en el fondo del anuncio era la necesidad de encontrar una salida pactada con los civiles y de buscar la aprobación legitimante de los partidos políticos. Como recuerda González Bombal, “la

¹²No hemos de ver, por tanto, a estas Fuerzas Armadas apelando a un discurso homogéneo y coherente. Al contrario, entre los militares se podían encontrar voces y proyectos incluso contradictorios y enfrentados, que explican esas incongruencias. Como señaló Inés González Bombal en una obra imprescindible para entender estos problemas: “su [de la dictadura] legitimidad básica presentó así una manifiesta incoherencia programática porque su concepción de la política no guardaba relación alguna con la supuesta finalidad que aseguraron justificaba su acceso al poder: la restauración de la democracia” (GONZÁLEZ BOMBAL, 1991, p. 14).

¹³Casi dos años antes, en enero de 1977, los militares habían difundido el documento *Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional*, en las que ya se hablaba de la creación de una democracia en la que tendría un papel capital el Movimiento de Opinión Nacional. El texto, sin embargo, no alcanzaría mayor repercusión precisamente por su gran generalidad.

persistencia del registro global en el que se planteó así la demanda de legitimación imposibilitaría en su momento precisar los términos concretos de un acuerdo” (GONZÁLEZ BOMBAL, 1991, p. 25). Esas indefiniciones, obviamente, no contribuyeron al entusiasmo de los civiles con los que debía negociar. El vicepresidente justicialista Deolindo Bittel argumentó su desconfianza señalando que “si el documento pretende consagrar proscripciones se convertirá en un elemento irritativo que en nada beneficiará al país” (Resumen, 21 dic. 1979).

A pesar de estos obstáculos, a lo largo de 1980 se abriría la primera ronda de diálogo entre los militares y las principales figuras políticas. Como informa Adrián Velázquez Ramírez, “por la dinámica que adoptó el encuentro, más que un diálogo, la entrevista con el ministro [del Interior, Albano Harguindeguy] se asemejaba más a un referendo respecto a la legitimidad de las Fuerzas Armadas para conducir la etapa de normalización institucional” (VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 2015, p. 4-5). En efecto, los militares terminaron por caer en su propia trampa, creyendo que la mera concurrencia a su diálogo suponía la convalidación de lo realizado por el *Proceso*. Pero, como prueba de su inutilidad como estrategia a la hora de buscar mayor legitimidad, sólo Raúl Matera, un político de escasa representatividad, acudirá a la convocatoria en representación de la formación justicialista.¹⁴

En medio de ese punto muerto, la llegada a la presidencia del general Roberto Viola en marzo de 1981 supondría una apertura y un nuevo enfoque re-

specto a los planteamientos militares anteriores. De hecho, algunos autores opinan que con él se inicia una fase de liberalización finalmente truncada por su desplazamiento y su recambio por el general Galtieri (MAZZEI, 2011 p. 12)¹⁵. En efecto, en sus declaraciones, el nuevo presidente parecía dar la razón a aquéllos que apostaban por el inicio de un periodo de transición: “lo que se inaugurará ahora es lo que podríamos llamar una etapa de participación, es decir, de tránsito de un gobierno militar constitucional a un estado total de derechos” (La Nación, 28 feb. 1981). El acercamiento de Viola a los partidos se concretaría con el anuncio de una segunda ronda de diálogos en la que, a diferencia de la anterior, los convocados serían interpelados como representantes de cada agrupación y no como figuras individuales potencialmente cooptables.¹⁶

Todo ello plasmaba que, tras unos primeros años de autosuficiencia, algunos militares empezaban a ser plenamente conscientes de que necesitaban la aprobación de los políticos para apuntalar la legitimidad del *Proceso*. Sin embargo, pese a la relativa apertura experimentada con Viola, su oferta era mucho más modesta de lo que podría aparentar. Como recuerda Paula Canelo: “la condición que impone Viola a la ciudadanía como requisito es tal vez la más absoluta de todas: el consenso total, entendido como acuerdo ferviente e inequívoco alrededor de los valores y principios que encarnan las Fuerzas Armadas” (CANELO, 2001 p. 124). Viola pretendía construir su legitimidad en el hecho de ser el timón de un proyecto que desembocaría en una nueva democracia que, pese a la inclusión de los par-

¹⁴Hasta un peronista tan moderado como Ángel Robledo llegaría a criticar la iniciativa del diálogo en estos términos: “el diálogo político se hace sin muchas precisiones, con reglas insuficientes para arribar a conclusiones que permitan construir las bases de negociación o coincidencias, por lo que puede convertirse en una encuesta de opiniones, sin trascendencia suficiente” (La Nación, 30 mar. 1980).

¹⁵Al igual que Hugo Quiroga, este autor no considera que la apertura auspiciada por Viola marque el inicio de la transición argentina, dada su escasa trayectoria. En su definición, “toda transición comienza con la crisis del régimen autoritario. A esa primera etapa se la denomina habitualmente “apertura” o “liberalización”.

¹⁶En un giro respecto a las posiciones de una dictadura que se había movido entre las coordenadas antiperonistas, el nuevo ministro del Interior, Horacio Liendo, declaró que también “el peronismo es un interlocutor válido” (La Nación, 7 abr. 1981).

tidos tradicionales, se fundamentaría en los principios del *Proceso*. Sin embargo, su carácter timorato y corto hizo que encontrara resistencias tanto entre sus propios camaradas como en la esfera partidaria.

Así, el plan político de Viola sería enfrentado por la propia Junta Militar, que consideraba que la apertura traicionaba la filosofía del *Proceso* y que le apartaba de sus verdaderas fuentes de legitimación. Su oposición no sería sólo retórica: en diciembre de 1981, la Junta apartaron a Viola de la presidencia, nombrando al general Leopoldo Galtieri como su sustituto.

Por parte de los partidos, la llamada de Viola tampoco suscitará gran entusiasmo. Los partidos políticos resurgían poco a poco del letargo impuesto por los años más duros de la represión y empezaban a cuestionar cada vez más la unilateralidad del régimen para imponer la modalidad de la salida del régimen. Su respuesta a la estructura de oportunidades abierta con Viola fue la creación, en julio de 1981, de la llamada Multipartidaria Nacional, polo prodemocrático que agrupaba a los principales cinco partidos¹⁷. Con ese paso, moderado, pero firme, los políticos demostraban no sólo que habían sobrevivido tanto a su posible desaparición como a los intentos de cooptación, sino que buscaban ser protagonistas de la transición, más allá del rol pasivo y de confirmación que les reservaba Viola.

En claro contraste con el periodo anterior, con la llegada de Galtieri se asiste a un intento de retorno a lo que se consideraban que eran las raíces de legitimación del *Proceso*. El nuevo presidente trató de dotar a su cargo de la autoridad que presuntamente había perdido

durante el paso de un Viola presentado como pusilánime. Abortando cualquier intento de diálogo con los partidos tradicionales, la idea de Galtieri pasaba por retener el poder en manos de los militares el tiempo necesario para consolidar una alternativa afín al pensamiento castrense que regenerara el panorama político argentino que hiciera inevitable el retorno de la política tradicional.¹⁸

A pesar de esa voluntad restauradora, resultaba obvio que la situación de 1982 era muy diferente a la de 1976 y el nuevo discurso tenía muy difícil cumplir su tarea de concitar consenso social. Desgastada por tantos años de represión y por los rigores de las políticas económicas y descreída ante unas Fuerzas Armadas que mostraban sin tapujos su desunión, la sociedad acogió con poco entusiasmo y gran indiferencia el nuevo rumbo del *Proceso*.

En ese contexto de mayor aislamiento, pero en el que no cabía ya la salida negociada ante el encastillamiento de las posiciones, se comprende mejor la huida hacia delante que supuso la invasión de las islas Malvinas en abril de 1982¹⁹. El riesgo de la operación era sumamente alto, pero como señalan Novaro y Palermo, “la idea de recuperar Malvinas no era en absoluto artificial ni circunstancial, era un proyecto de larga data, sustentado en motivaciones sinceras del régimen militar, que se descontaba que contaría con un amplio respaldo civil” (NOVARO; PALERMO, 2003, p. 412). Ante la erosión crónica de su legitimidad, el éxito de los militares en el área específica de su competencia repararía, con creces, su maltrecha imagen y les permit-

¹⁷La Multipartidaria incluía a la Unión Cívica Radical (UCR), al Partido Justicialista (PJ), al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), a la Democracia Cristiana (DC) y al Partido Intransigente (PI). No debemos entender a la Multipartidaria, al menos durante sus primeros meses de vida, como un nudo de oposición frontal al régimen: más que como un enemigo, se concebía a sí mismo como un interlocutor del gobierno con el que trabajaría por el objetivo del regreso a la democracia.

¹⁸El nuevo proyecto político era mucho más sinuoso de lo que podría parecer a simple vista, ya que no cancelaba necesariamente la salida electoral, sino que la condicionaba, quizás de forma ingenua, a ese reaseguro partidario que permitía que en el futuro no cambiaran las coordenadas que dispuso la dictadura.

¹⁹Además de las obras generales sobre el *Proceso* ya citadas, sobre la guerra de Malvinas se pueden consultar también los trabajos de (GILLY, 1983), (VERBITSKY, 2002), (ROZITCHNER, 2005), (PALERMO, 2007) y (YOFRE, 2011).

iría afrontar la salida del régimen desde una posición de fuerza y con posibilidad de imponer sus condiciones.

Como en sus orígenes, el paradigma bélico volvía a sustentar el entramado legitimador de la dictadura, sólo que en esta ocasión las armas no se dirigirían contra la llamada subversión, sino contra los británicos. El esperado éxito en la recuperación sentaría las bases de un nuevo pacto fundante, por el que el *Proceso* ya no sería recordado por su brutal represión y su insolidario manejo de la economía, sino como el periodo que trajo la paz contra la subversión y en el que se reincorporó el ansiado territorio perdido.

Galtieri, ciertamente, ganó las primeras batallas por la legitimidad: la causa Malvinas poseía tal tirón popular que muy pocas voces se atrevieron a criticar abiertamente la jugada de la dictadura²⁰. La guerra real, la librada contra los británicos, sin embargo, supuso una derrota sin paliativos para los argentinos. Con la retirada de Malvinas en junio, tras apenas mes y medio de guerra, se derrumbaba todo el andamiaje legitimador de Galtieri, quien debió renunciar inmediatamente a la presidencia en medio de una crisis irreversible que atravesaba lo político, lo económico, lo social y lo militar.

Su sustituto, un semidesconocido Reynaldo Bignone, ya no podría apelar a la carta del retorno a las raíces doctrinales, ni dispondría del tiempo para que aquella cría del *Proceso* cuajara por fin. Su misión, lejos de los proyectos refundantes iniciales, sería mucho más modesta: conseguir que la retirada de los mili-

tares fuera lo más ordenada posible y que no se cruzaran ciertas líneas rojas, especialmente la de la revisión del pasado represivo.

Los partidos políticos durante el Proceso

La relación que mantuvo la dictadura con los partidos fue siempre ambigua. Si bien uno de los objetivos declarados por el régimen militar fue el de crear un nuevo orden político²¹, el hecho de que la actividad de los partidos quedara suspendida y que no fueran directamente disueltos da pistas sobre las incongruencias del discurso procesista y sobre la falta de unanimidad dentro de los uniformados respecto a un tema tan clave como sensible.²²

Pese a estas contradicciones, resultó una sorpresa que partidos como el peronista sobrevivieran a los primeros años del *Proceso*, cuando se desató sobre ellos todo el peso de la represión. Tanto la expresidenta Isabel Perón como las figuras más importantes del partido y de los sindicatos afines fueron encarcelados. Los que consiguieron huir del destino de la cárcel debieron partir pronto hacia el exilio. Mientras, las bases sindicales, barriales y juveniles del movimiento se vieron duramente golpeadas por la represión clandestina, haciendo del peronismo, como identidad política, la víctima más castigada por el régimen. El ataque de los militares se cernía además sobre una estructura ya bastante debilitada por su propia mano. La muerte de Perón había descabezado a un partido de naturaleza eminentemente vertical y personalista. Las violentas luchas intestinas

²⁰Por supuesto, la respuesta de los partidos mayoritarios tampoco equivalió a una adhesión absoluta. La mayoría aprobó la actuación militar y mostró su solidaridad, pero, a grandes rasgos, trataron de no ofrecer un aval irrestricto a Galtieri.

²¹Recuerda Canelo que la creación de una nueva élite política “fue un objetivo perseguido activamente por la dictadura argentina, dado que la creación de dicha élite parecía ser una garantía de éxito, diferenciándola de las experiencias autoritarias anteriores” (CANELO, 2011, p. 325).

²²El decreto 6 que suspendía la actividad de los partidos políticos se complementó un año después con la ley que prorrogaba los mandatos de las distintas direcciones por un tiempo indefinido. Por esa razón, Deolindo Bittel mantuvo la vicepresidencia del Partido Justicialista durante todos estos años. En realidad, la máxima posición del partido le correspondería a Isabel Perón, como presidenta del mismo, pero su indiferencia por la política tras ser liberada de la prisión hizo que la jefatura ejecutiva quedara en manos de Bittel. Por otra parte, el justicialismo había sido proscrito por los militares entre 1955 y 1973. El recuerdo de esta experiencia, con un peronismo que incluso salió reforzado de esa etapa, volviendo al poder en 1973, también serviría de freno en 1976 a la hora de prohibir este partido.

que se desataron antes y sobre todo después de su muerte, en julio de 1974, fueron minando la capacidad de reacción de un partido que se mostró impotente ante la amenaza del golpe. Al mismo tiempo, su desastroso manejo de la economía y la sensación de caos generalizado fueron consumiendo su credibilidad y legitimidad de cara a la sociedad.²³

El justicialismo, como el resto de partidos, se sobrepondría a esta situación, aprovechando las citadas dudas de los militares, pero también gracias al instinto de sus políticos y al enorme arraigo y tradición que, pese a la convulsa historia del país, estas identidades políticas tenían en el imaginario popular. Así, si bien la dirección justicialista se mantuvo agazapada durante los años más oscuros del *Proceso*, a la altura de 1979, los distintos partidos empezaron a dar muestras de que iban saliendo de su situación de letargo.

Siempre dentro de una difícil reconstrucción, marcada por un contexto de ausencia de un liderazgo legitimado, el peronismo dio muestras de un perfil algo más confrontativo con la dictadura que la UCR liderada entonces por Ricardo Balbín, más dado a consensuar una salida con los militares²⁴. De esta manera se explica, por ejemplo, que el peronismo enviara un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de su visita al país en 1979 en el que se denunciaba “la muerte y desaparición de miles de ciudadanos” (IRIBARNE, 2006, p. 97).²⁵

Como ya mencionamos, los partidos fueron alcanzando una madurez que les permitió en julio de

1981 formar un polo conocido como la Multipartidaria. Sin embargo, no debemos perder de vista que el peronismo que llega al escenario post Malvinas es un partido atravesado por múltiples líneas de fractura. Las divisiones recorrían debates como el papel de la expresidenta Isabel Perón dentro del partido, la mayor o menor oposición a la dictadura o los distintos criterios de reorganización de la institución. Si bien la gran mayoría del partido se reunía en torno al liderazgo del sindicalista Lorenzo Miguel y Deolindo Bittel, acataba la presidencia simbólica de Isabel y adoptaba una oposición moderada respecto a los militares, existía una minoría, la de los llamados antiverticalistas encabezados por Raúl Matera y Ángel Robledo, que se mostraba mucho más comprensiva con las Fuerzas Armadas²⁶. Más allá de este eje, existían otros agrupamientos dentro de un movimiento caracterizado por la ausencia de un líder consensuado y por la falta de normas de funcionamiento rutinizadas (LEVITSKY, 2005). Figuras como Julio Romero habían mantenido excelentes relaciones con Galtieri, mientras que las posiciones más duras e izquierdistas eran asumidas por la Intransigencia y Movilización de Vicente Saadi.

El resto de partidos importantes también llegaba a la coyuntura posmalvinense con una similar mezcla de impulso y dudas. La UCR, por ejemplo, se había quedado huérfana un año antes de su líder Ricardo Balbín y poco a poco estaba virando hacia posiciones más confrontativas. El MID, por su parte, había protagonizado una trayectoria realmente ambigua: por un parte, había

²³ Como obras generales para el estudio del tercer gobierno peronista se pueden consultar: (DE RIZ, 1981), (ANZORENA, 1988) y (GILLESPIE, 1998).

²⁴ Como explica Adrián Velázquez, Balbín apostaba por una estrategia discursiva que se situaba en los mismos límites del disenso permitidos por la dictadura. Su proyecto era hacer del radicalismo el interlocutor privilegiado y confiable de los militares cuando se iniciara una prevista transición pactada. Sin embargo, “el reconocimiento de la legitimidad a las Fuerzas Armadas no suponía un reconocimiento global como el que se daba por descontado desde el fuero militar” (VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 2015, p. 10).

²⁵ La CIDH visitó Argentina en septiembre de 1979. Los militares aprobaron su llegada confiando en que su informe sería benévolo y poco profundo y que serviría para cancelar ese turbio pasado de la represión ilegal de manera definitiva. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión supondrían un tremendo golpe a la legitimidad del *Proceso*, que veía cómo la cuestión de los desaparecidos empezaba a contar con un eco internacional.

²⁶ De hecho, Matera había acudido al diálogo lanzado en tiempos de la presidencia de Videla y, posteriormente, se reunió públicamente con Galtieri (Clarín, 11 mar. 1982). Otros miembros de su línea como Luis Rubeo participaron anteriormente en una cena de agasajo a Viola.

sido una de las primeras y más insistentes voces contra la dictadura, pero su crítica sólo se circunscribía a la esfera económica y técnica. En el resto de asuntos, muy especialmente en la cuestión de los derechos humanos, guardaba un toral silencio, buscando convertirse en el interlocutor privilegiado de las Fuerzas Armadas. El derrumbe del *Proceso*, sin embargo, hizo que cualquier posibilidad en ese sentido se frustrase y el MID, que no dejaba de ser un partido de tamaño medio, debió encontrar un nuevo camino y objetivo. Todas estas divisiones serán un factor a tener en cuenta a la hora de entender el carácter casi errático de los partidos en su relación con la dictadura y las cambiantes respuestas que dieron a los militares. La resolución de los conflictos intrapartidarios suscitó además una energía que no pudo ser canalizada hacia la oposición contra las Fuerzas Armadas. Complicando la situación, la victoria británica replanteó las reglas de juego de la relación entre civiles y militares e hizo que todos los actores tuvieran que apelar a nuevos discursos y estrategias.

La oferta de la concertación y el fracaso de una transición pactada

Ante Bignone, el que sería el último presidente de Proceso, se planteaba un enorme reto que supo resumir el periodista Joaquín Morales Solá: “¿qué hacer con la Argentina que perdió una guerra y qué hacer en su último y triste tramo con un proceso que repartió a manos llenas durante un lustro estéril?” (Clarín, 29 ago. 1982). Agotados ya todos los recursos a disposición de los militares, Bignone era plenamente consciente de que su misión era dirigir el proceso que llevaría a la celebración de elecciones en un plazo inferior a dos años.

No debemos ver, sin embargo, a Bignone y a su equipo como una nueva hornada de militares convencidos de las bondades de los valores democráticos. Más bien, se concebían a sí mismos como los gestores de una crisis de la que sólo cabía salir con los menores daños posibles y en la que las elecciones eran sólo la solución menos perjudicial.²⁷

En realidad, a pesar de la sensación de derrumbe del régimen y de la inevitabilidad de las elecciones, eran muchos los temas que civiles y militares debían discutir y definir. Los tiempos y las condiciones de esos comicios eran, por ejemplo, un asunto sensible que podía decantar el resultado en uno u otro sentido. Pero, sin duda, la cuestión que más angustiaba a los militares era cómo y hasta dónde se revisaría su actuación durante la lucha antsubversiva. De ahí el interés de Bignone en organizar un diálogo formal que resolviera todos estos problemas antes de la entrega del poder. En cierto modo, su idea era realizar una transición pactada y con el mayor orden posible.

Sin embargo, los obstáculos para llegar a una solución así eran numerosos. En primer lugar, la guerra de Malvinas había multiplicado las divisiones y rencores que se venían acumulando al interior de las Fuerzas Armadas. La elección de Bignone como nuevo presidente había provocado las protestas tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea, que abandonaron la Junta en señal de desacuerdo. Obviamente, esta disolución de la Junta no suponía un problema exclusivamente militar, sino que afectaba a su ya bastante dañada imagen de cara a la sociedad y al grado de legitimidad que mantenían los uniformados.

²⁷Prueba de ello serían las declaraciones del nuevo ministro del Interior, Llamil Reston, en mayo de 1983: “no hay dudas de que se han presentado situaciones no queridas que nos obligaron a apurar algunos pasos, como éste del acto electoral, que la Junta actual lo recibió como una imposición de la Junta que se fue” (El Bimestre, v. 9, 12 may. 1983).

Jaqueado y sin apoyos, la primera misión de Bignone para que su idea de concertar llegara a buen puerto sería recuperar, aunque fuera precariamente, la unidad militar. En ese sentido, el *síndrome Núremberg*, el miedo a rendir responsabilidades por sus crímenes, actuaría como principal factor cohesionador y como una de las causas principales de que a mediados de septiembre de 1982 la Junta pudiera reconstituirse.²⁸

Pero si Bignone tuvo éxito a la hora de reunificar a los militares en torno a un consenso mínimo, su relación con los políticos tendría un desarrollo mucho más ambiguo. De hecho, en un primer momento, el presidente militar recibiría señales que se podían interpretar como de acercamiento y moderación por parte de las formaciones políticas. La Multipartidaria mostró durante sus primeras semanas de mandato una actitud de cautela, posiblemente porque vio en Bignone una oportunidad de cambio.²⁹

Aunque los políticos podrían haber aprovechado la extrema debilidad del gobierno dictatorial para arremeter definitivamente contra él, su timidez obedecía a cierta lógica. En primer lugar, ellos partían también de una situación precaria: además de arrastrar años de persecución y represión, su adhesión a la causa Malvinas y su excesiva cercanía al poder dictatorial durante esa coyuntura bélica les tenía que pasar factura de un modo u otro³⁰. Además, Bignone estaba ofreciendo gestos

para ganarse un voto de confianza, por lo que podría resultar contraproducente un acoso que podría desatar a los elementos más duros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, en gran parte, las cúpulas partidarias estaban en deuda con los militares: pese a toda la represión, fueron éstos los que reconocieron, legitimaron y prorrogaron sus mandatos durante esos años, congelando el debate interno dentro de los partidos y la aparición de fuertes líneas opositoras.

Era también cierto que Bignone había realizado ciertos pasos para acercarse a los partidos. El 1 de julio de 1982, el día de su asunción como presidente, se levantó la limitación de las actividades políticas que se había instaurado en 1976³¹. Un mes más tarde se promulgaría el esperado Estatuto de los Partidos Políticos, que sería muy similar al aprobado en 1965, en tiempos del presidente civil Arturo Illia (La Nación, 27 ago. 1982)³². Ese mismo día, además, se anunció la apertura de una nueva ronda de consultas con los distintos partidos, en cuyo marco se realizaría la primera reunión entre militares y la conducción del partido desde el golpe (El Bimestre, v. 5, 2 sep. 1982).

Los buenos resultados cosechados con la ronda de diálogos animaron al presidente a persistir en su estrategia de acercamiento a los partidos. De esa manera, a fines de septiembre de 1982, en el marco de una reunión de gobernadores, se lanzaría oficialmente la ini-

²⁸Tras Malvinas, el esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura alcanzó un impulso definitivo. Uno de los descubrimientos más sobrecogedores sería el de 88 fosas comunes anónimas en el cementerio de Grand Bourg (Clarín, 24 oct. 1982). En ese contexto, con una sociedad concienciada de que los crímenes no eran excesos aislados, sino parte de un plan represivo, los militares entendieron que sólo la más absoluta unidad en torno a la cuestión les podría permitir escapar de un juicio.

²⁹Bittel afirmaría esos días respecto al nuevo presidente que “al cojo hay que dejarlo caminar. Hacer críticas duras y destruir, en este momento, me parece un apresuramiento” (El Bimestre, v. 4, 3 jul. 1982).

³⁰Si hasta el momento de la toma de las Islas, las relaciones entre los partidos y el general Galtieri eran prácticamente nulas (salvo escasas excepciones, como la del justicialista Raúl Matera), el episodio de Malvinas supuso un acercamiento de los políticos al poder militar. La Multipartidaria, por ejemplo, expresó su “total apoyo y solidaridad” a “todas las medidas conducentes a la consolidación de la soberanía argentina” sobre las Islas (La Nación, 3 abr. 1982) e incluso algunos políticos, como Bittel o Robledo, asistieron a la asunción del general Menéndez como nuevo gobernador militar de Malvinas. Se frenaba de raíz así un periodo de efervescencia opositora que tuvo su clímax en una concentración sindical en la porteña Plaza de Mayo, realizada el 31 de mayo, apenas dos días antes de la toma de las Islas.

³¹Ello significa que todas las actividades partidarias que hemos mencionado anteriormente eran, técnicamente, ilegales. El desgaste de la dictadura y la imposibilidad de reprimir cualquier movimiento hizo que se crearan estos espacios para el disenso que progresivamente se irían ampliando.

³²Un punto, sin embargo, demostraba las prioridades y preocupaciones de los uniformados. Así, “se declaran ilegales aquellas organizaciones políticas que exijan una investigación sobre la actitud de las fuerzas armadas durante los años de la lucha contra la subversión” (El Bimestre, v. 4, 4 ago. 1982).

ciativa de la concertación. Bajo esa palabra se escondía la voluntad de los militares de acordar con los políticos una serie de puntos antes de su relevo en el poder, previsto para inicios de 1984. Definitivamente, la idea quedaría plasmada en un comunicado de la reunificada Junta en el que se reconocía que “es imprescindible ajustar hoy cuanto sea necesario para que el próximo Gobierno constitucional asuma responsabilidades” (El País, 13 nov. 1982).

En un nuevo giro a su relato bélico, los militares explicaban que el país había librado en esos años dos guerras, una contra la subversión y otra contra el colonialismo: “victoriosos en una, sufriendo la frustrante realidad y un revés militar en otra, nos encontramos con capacidad para evaluar y asumir sus consecuencias”. Malvinas, por tanto, había quebrado el tono triunfal de ese paradigma de la guerra que habían usado siempre los militares argentinos. Tras esta derrota, la Junta asumía su cuota de responsabilidad (tampoco completa, ya que hablaba de los “errores que todos cometimos”) y se proponía tratar con los civiles un consenso para salir de la crisis en la que se encontraba la nación.

Pero serían nada menos que 15 los temas que se debían incluir en esa concertación: la vigencia del estado de sitio, la mecánica electoral, la lucha contra el terrorismo, los desaparecidos, la investigación de los ilícitos (eufemismo para los delitos económicos cometidos por los militares), la estabilidad de la justicia, el plan económico, la deuda externa, la fijación del presupuesto de 1984, la represa de Yacyretá, los sindicatos, las obras sociales, Malvinas, el conflicto del canal del Beagle y la presencia de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno.

La extensísima y difusa relación de puntos a comentar, en la que se mezclaban cuestiones políticas, económicas y legales sin un orden concreto, reflejaba

varios aspectos de la situación de los militares en esa coyuntura. En primer lugar, hablaba de la concepción casi mágica que éstos tenían sobre el pacto, como si tan sólo su mención o la misma enumeración de esta sucesión de temas bastaran para resolver los graves problemas que los asediaban. En ese aspecto, los uniformados no habían avanzado demasiado desde los tiempos de la primera ronda de diálogo, cuando pensaban que la mera asistencia de los civiles convalidaba y legitimaba lo actuado hasta entonces. Que toda la iniciativa y decisiones para lanzar la concertación quedara en manos de los militares, sin ninguna participación por parte de la sociedad civil, señala asimismo qué idea de pacto unilateral, sin aristas ni discusiones- manejaban las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, se observa que, en síntesis, las mayores preocupaciones de los militares se encontraban en que no se investigara lo actuado por ellos durante el periodo dictatorial (especialmente, en el tema de los desaparecidos, pero también en todo lo relacionado con los llamados ilícitos cometidos y a su gestión de la guerra de Malvinas) y en lograr un acomodo institucional que les permitiera seguir siendo un actor con prebendas y poder de decisión en el sistema democrático. Así, con algunos cambios producto de la situación de debilidad en la que se encontraban, las Fuerzas Armadas seguían persiguiendo uno de los objetivos que se habían propuesto desde un primer momento: su inserción institucional en el sistema político, desde la que podrían vigilar que la nueva democracia no se apartara de los principios del *Proceso*. Al mismo tiempo, era patente que los militares seguían enrocados en su reivindicación de la lucha contra la subversión, por muchas pruebas que se descubrieran en su contra. Por último, que todos estos temores y deseos se expresaran en tan extensa retahíla de temas (y no en los cuatro o

cinco que anunció anteriormente Bignone)³³ pudo servir para suavizar la probable discusión y no exponer tan abiertamente los puntos más vitales a debatir, pero, sobre todo, plasmaba las distintas perspectivas que pugnaban al interior de las Fuerzas Armadas.

De hecho, mientras un sector de éstas opinaba que sólo debía marcarse la filosofía general de lo que se buscaba con la concertación y negociar a partir de esa base, otro grupo era partidario de la publicación pormenorizada de las cuestiones a debatir. Dentro de estos últimos, en el Ejército, por ejemplo, existían voces que pensaban que todo debía limitarse al tratamiento de unos pocos puntos (siempre menos de 10), mientras que otra fuerza, en cambio, se desmarcó proponiendo más de 20 temas (Clarín, 21 nov. 1982). Sólo al final, el llamado Equipo de Compatibilización Interfuerzas terminaría redactando esos 15 aspectos como una forma de contentar a todas las posiciones (Somos, 19 nov. 1982).

En sus sueños iniciales, los militares planeaban lanzar la concertación en un evento público acompañado por todos los sectores sociales y políticos, en un lugar con fuerte carga simbólica como San Nicolás o Tucumán, como perfecto broche formal para lo que consideraban que sería el nuevo pacto sobre el que se construiría la democracia.

En realidad, la concertación se limitaría tan sólo a una declaración de intenciones por parte de los uniformados, dado el nulo entusiasmo que despertó en las filas de los políticos. Así, la Multipartidaria rechazaría la llamada de los militares por ser “extraña a la Constitución Nacional” y por “condicionar al próximo Gobierno elegido por el pueblo” (El País, 18 nov. 1982). Bittel ya en su momento había advertido de que “a

nuestro juicio las Fuerzas Armadas deben cumplir su palabra de llamar a elecciones y entregar el gobierno a aquellos a quienes el pueblo elija democráticamente. Cualquier otra cosa resulta extraña y no coincidente con las promesas del presidente Bignone” (Clarín, 17 oct. 1982). Ítalo Luder, quien sería finalmente candidato peronista a la presidencia, argumentaría que sin haber recibido previamente ninguna información sobre Malvinas o sobre los desaparecidos resultaba imposible negociar sobre estos temas (Clarín, 13 nov. 1982). Lo verdaderamente sorprendente es que ni siquiera los partidos de derecha, hasta hacía unos meses totalmente afines al régimen, apoyaran el llamado a concertar, sabedores de que acercarse a la dictadura en esta coyuntura equivalía al suicidio político. Por ejemplo, Emilio Hardoy, del Partido del Centro, admitía que no sabía “qué es lo que busca el Gobierno con esto” y señalaba que “lo único que aquí hay que concertar es el día y la hora de las elecciones” (El Bimestre, v. 6, 12 nov. 1982).

Teniendo en cuenta la aparente buena sintonía que se había establecido entre Bignone y los partidos, cabría preguntarse por qué la oferta de la concertación cosechó un rechazo tan sumario. En el fondo, resultaba casi irónico que los militares, que siempre se habían mostrado tan autosuficientes y renuentes a cualquier cercanía con los políticos, fueran ahora rechazados, cuando realmente necesitaban el apoyo de éstos. Pero, obviamente, el contexto había cambiado y los políticos no querían atar su destino a una nave que hacía aguas por todas partes.

No sólo se estaba destapando el horror de la represión y numerosos casos de corrupción, haciendo imposible cualquier interpretación benévola de la dicta-

³³Sólo unos días antes, se había anunciado que los temas a tratar serían cinco, haciendo hincapié que en lo respectivo a la lucha contra el terrorismo deberían darse “absolutamente todas las coincidencias” (Clarín, 21 oct. 1982).

dura, sino que la crisis del régimen era global y afectaba también a lo económico: a fines del mes de noviembre de 1982, la deuda externa llegaba a los 40.000 millones de dólares, la inflación superaba el 200 % en el acumulado anual y el paro alcanzaba el 15 % (El País, 30 nov. 1982). Ante ese marasmo en el que podían quedar atrapados si se acercaban demasiado, la estrategia de los partidos consistió en dejar que los militares resolvieran por sí mismos sus problemas, sin adquirir compromisos que coartaran al futuro gobierno democrático.

Más allá del vago planteamiento de la oferta, existían, pues, escasos incentivos para que los partidos aceptasen entrar en la concertación. La promesa de que las elecciones se iban a celebrar con total seguridad, fuera cual fuera el destino del diálogo planteado, arrebató a los militares la única carta con la que podrían jugar desde una posición de fuerza. Más allá de algunos detalles, como la fecha exacta de los comicios, era poco lo que los políticos podían obtener de un diálogo que, por el contrario, podía suponer un fuerte desgaste de su imagen frente a la sociedad. Inmersos cada vez más profundamente en sus propios procesos de reorganización y en sus carreras por las candidaturas presidenciales, los partidos se mostrarían cada vez menos atentos a una política nacional en la que otorgaron la iniciativa a los militares.

Se frustraba de ese modo el último intento serio para que la transición argentina tuviera un desenlace pactado. A pesar de este fracaso y de que las relaciones entre políticos y militares se endurecieron a partir de entonces, Bignone continuó tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con los partidos. De hecho, en febrero de 1983 se celebrará una nueva ronda de diálogos, pero todo se desarrollaría bajo las mismas coordenadas de indiferencia. Ante esta situación, los militares buscaron resolver unilateralmente el problema de los desapareci-

dos a partir de dos iniciativas: una ley de amnistía, en la que se incluían como beneficiarios, y la redacción de un texto, conocido como *Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo*, en la que daban su versión y su justificación sobre lo actuado durante la represión.

Ninguno de estos dispositivos fue de gran utilidad para las Fuerzas Armadas. El *Documento Final*, emitido en abril de 1983, ahondaba en una teoría de los excesos ya bastante desprestigiada y sólo obtuvo rechazo por parte de todos los actores sociales. La ley de autoamnistía, por su parte, fue derogada tras la asunción de Raúl Alfonsín como nuevo presidente en diciembre de 1983 y resultó totalmente inútil a la hora de frenar los juicios contra los militares.

De esta manera, pese a los múltiples intentos de Bignone de llegar a una salida pactada, simbolizada en su oferta de concertación, los pasos del proceso democratizador argentino tras la guerra de Malvinas se asemejaron más bien a un desarrollo en el que los distintos actores avanzaron por canales separados, sin apenas interacciones, y dejando la resolución de cuestiones claves como el destino legal de las Fuerzas Armadas para el futuro gobierno democrático.

Conclusiones

Como todo gobierno autoritario, el llamado *Proceso de Reorganización Nacional* argentino encerraba un irresoluble problema de legitimidad. La sensación de caos que dejó el gobierno peronista anterior más la fuerte represión y el discurso de éxito ante la llamada guerra contra la subversión generaron un cierto consenso social en torno a la dictadura que cubrió a ésta de una pátina de legitimidad. Sin embargo, la imposibilidad de mantener ese nivel represivo y las continuas luchas intramilitares fueron desgastando la fortaleza de esa dictadura. La sociedad civil, y con ella los distintos

partidos políticos, fueron reemergiendo y empezando a cuestionar ciertos aspectos del Proceso, desde su política económica a la cuestión de los desaparecidos.

Fruto de sus discrepancias, las Fuerzas Armadas no lograron construir un sólido camino de salida para su dictadura que les otorgara legitimidad de destino. Al contrario, a partir de 1978, cuando empezó a hacerse notorio que el Proceso empezaba a agotarse, los militares ensayaron diferentes y hasta contradictorios proyectos, desde la tímida apertura de Viola hasta el regreso a las fuentes originales y a la dureza de Galtieri. La situación se volvió tan complicada que Galtieri sólo imaginó una salida en la aventura militar de las Malvinas, que terminó en un duro fracaso y en la liquidación de cualquier intento de perpetuar la dictadura.

En ese contexto, a fines de 1982, se situó la llamada concertación que propuso el nuevo presidente Bignone, una oferta de diálogo con los partidos políticos con la idea de salvar una mínima legitimidad para la dictadura y proteger a los militares de futuros juicios por las violaciones de derechos humanos. El intento de conseguir en el último momento una transición pactada,

sin embargo, fracasó. Los partidos, el peronismo entre ellos, habían protagonizado una oposición muy moderada a lo largo de los años anteriores, que se extendió también al periodo tras la guerra de Malvinas. No obstante, era poco lo que podían obtener de acordar con una dictadura totalmente desprestigiada que inexorablemente tenía que dar paso a elecciones a corto plazo.

El capítulo de la concertación, por tanto, sintetiza la rareza del proceso de transición argentino. Aunque básicamente consistió en un cambio por colapso del régimen dictatorial tras su derrota en Malvinas, no debemos olvidar, en primer lugar, que los militares venían sufriendo un desgaste muy fuerte desde varios años antes. En segundo lugar, pese a que la guerra marca un punto de no retorno, las Fuerzas Armadas conservaron todavía recursos suficientes como para plantear este pacto y para presionar (incluso durante el siguiente gobierno democrático) para que no se revisara judicialmente su actuación durante la dictadura. Envueltos en sus propias dinámicas internas, los partidos rechazaron la oferta, pero, conscientes de su propia debilidad, tampoco resolvieron en esos meses todas las aristas que planteaba la transición desde el *Proceso*.

Referencias bibliográficas

- ANSALDI, Waldo. El silencio es salud. La dictadura contra la política. In: TCACH, César; QUIROGA, Hugo. *Argentina 1976-2006: entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*. Rosario: Homo Sapiens, 2006.
- ANZORENA, Oscar. *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976)*. Buenos Aires: Contrapunto, 1988.
- CALVEIRO, Pilar. *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue, 2004.
- CANELO, Paula. La legitimación del Proceso de Reorganización Nacional y la construcción de la amenaza en el discurso militar. Argentina, 1976-1981. *Sociohistórica*, v. 9-10, 2001, p. 103-134.
- CANELO, Paula. *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo, 2008.
- CANELO, Paula. Construyendo elites dirigentes. Los gobernadores provinciales durante la última dictadura militar (Argentina, 1976-1983). *Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti*, v. 11, 2011, p. 323-341.
- DE RIZ, Liliana. *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Buenos Aires: Hyspamérica, 1981.
- GILLESPIE, Richard. *Soldados de Perón*. Buenos Aires: Grijalbo, 1998.
- GILLY, Adolfo. Las Malvinas, una guerra del capital. Cuadernos Políticos, n. 35, enero-marzo 1983, p. 15-51.
- GONZÁLEZ BOMBAL, Inés. El diálogo político: la transición que no fue. *Documento CEDES*, v. 61, 1991.
- IRIBARNE, Alberto (Comp.). *Letras contra el miedo. Documentos del Peronismo durante la dictadura (1976-1983)*. Buenos Aires: CS, 2006.
- LEVITSKY, Steven. *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
- LIDA, Clara; CRESPO, Horacio; YANKELEVICH, Pablo. *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica – El Colegio de México, 2008.
- MARTÍ, Salvador. ¿Y después de las transiciones qué? *Revista de estudios políticos*, n. 113, 2001, p. 101-124.
- MAZZEI, Daniel. Reflexiones sobre la transición democrática argentina. *PolHis*, año 4, n. 7, 2011, p. 8-15.
- NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. *La dictadura militar (1976-1983): del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós, 2003.
- PALERMO, Vicente. *Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura argentina contemporánea*. Buenos Aires: Sudamericana, 2007.
- QUIROGA, Hugo. *El tiempo del Proceso: conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens, 2004.
- ROTZICHER, León. *Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia. El punto ciego de la crítica política*. Buenos Aires: Losada, 2005.
- TCACH, César. Partidos políticos y dictadura militar en Argentina (1976-1983). In: DUTRÉNIT, Silvia (Ed.). *Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay*. México DF: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1996
- VELÁZQUEZ RAMÍREZ, Adrián. De la concertación a la Multipartidaria: el espacio político partidario en los albores de la transición a la democracia en Argentina (1980-1981). *Revista Contemporánea*, año 5, n. 7, v. 1, 2015.
- VERBITSKY, Horacio. *Malvinas: la última batalla de la Tercera Guerra Mundial*. Buenos Aires: Sudamericana, 2002.
- YOFRE, Juan B.. *1982: los documentos secretos de la guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del Proceso*. Buenos Aires: Sudamericana, 2011.

Submissão: 28/04/2016

Aceite: 19/09/2016